

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de febrero de 1995, ha dispuesto, conforme a lo prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Madrid, 16 de marzo de 1995.—P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

9458 *RESOLUCION de 14 de marzo de 1995, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 02/0000180/1995.*

De conformidad con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, se pone en conocimiento de los posibles interesados que con esta fecha se remite a la citada Sala el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 02/0000180/1995, interpuesto por doña Rosa María García López, contra Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Dirección General de la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre), sobre relación individualizada de méritos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al objeto de que si a su derecho conviene, puedan personarse en autos en el plazo de nueve días, en calidad de codemandados o coadyuvantes, debiendo comparecer debidamente representados en la forma establecida en los artículos 33 y 113 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 14 de marzo de 1995.—El Director general, Leandro González Gallardo.

9459 *ORDEN de 9 de marzo de 1995 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 32 de Madrid en los autos número 885/1994, promovidos por don Raúl Antonio Herrero.*

El Juzgado de lo Social número 32 de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de enero de 1995, en los autos número 885/1994, promovidos por don Raúl Antonio Herrero.

El citado procedimiento se promovió contra este Departamento, sobre diferencias salariales.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Que, con estimación de la demanda presentada por don Raúl Antonio Herrero contra el Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP) sobre cantidad, debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar al actor, por los conceptos de la demanda, 217.839 pesetas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid 9 de marzo de 1995.—P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

9460 *ORDEN de 31 de marzo de 1995 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 1.251/1992, promovido por don Jesús Ramón Picatoste Merino.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en grado de apelación, con fecha 26 de abril de 1994, en el recurso de apelación número 1.251/1992 en el que son partes, de una, como apelante, don Jesús Ramón Picatoste Merino, y de otra, como apelada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la sentencia de 11 de diciembre de 1990 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso 224/1987, sobre incompatibilidades.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Jesús Ramón Picatoste Merino, contra la sentencia de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, de 11 de diciembre de 1990, dictada en el recurso 224/1987. Sin costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid 31 de marzo de 1995.—P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987, «Boletín Oficial del Estado» del 30), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

9461 *ORDEN de 31 de marzo de 1995 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 112/1993, promovido por doña María Victoria Castillo Manzano.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado sentencia, con fecha 15 de febrero de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 112/1993 en el que son partes, de una, como demandante doña María Victoria Castillo Manzano, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 2 de junio de 1993, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 15 de febrero de 1993, sobre baja como mutualista obligatorio.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso presentado por doña María Victoria Castillo Manzano contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 15 de febrero de 1993 y de la Subsecretaría del Ministerio para las Administraciones Públicas de 2 de junio de 1993, las que anulamos por ser contrarias al orden jurídico, y en su lugar declaramos el derecho del actor a continuar afiliado a la MUFACE, teniéndole por cotizado el tiempo desde la baja hasta el efectivo cumplimiento de la presente. No hay motivos para la imposición de las costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás